

# Mi experiencia al frente del país

VICENTE FOX QUESADA

Soy un hombre de naturaleza emprendedora y deseo de metas ambiciosas. Esto me llevó a tomar la decisión, a los 46 años, de ingresar al Partido Acción Nacional.

Mi carrera política ha sido, además de vertiginosa, marcada siempre por grandes responsabilidades. En 1988 me afilié al PAN y ese mismo año inicié mi campaña para diputado federal y conseguí una curul para mi partido. En 1995 tuve el honor de que los guanajuatenses me eligieran, por una mayoría significativa, como su gobernador.

Nunca pensé en la vida política y jamás me vi como un político hasta que Manuel J. Clouthier me hizo consciente de que los empresarios nos quejábamos de la deshonestidad y de la corrupción, pero no hacíamos nada para cambiar ese estado de cosas. Después de consultarlo con mi familia decidí entrarle, dispuesto a aportar mi granito de arena en el cambio del país.

Como presidente he sido el responsable del liderazgo del país hacia la democracia. Ésta no ha sido una tarea fácil, en muchas ocasiones he encontrado obstáculos tan difíciles de remontar y tan incomprensibles que a veces me he preguntado por qué tiene enemigos la democracia.

El cambio político ha tocado intereses de grupos poderosos, que han dejado ver su fuerza cuestionando y boicoteando las acciones del gobierno. Se han ido modificando, también, malos hábitos políticos y esto ha implicado enfrentar la desconfianza y la falta de disposición a abandonar prácticas incorrectas, pero conocidas y habituales.

Por lo general, en los periodos de transición se presenta una de las dos disyuntivas que los caracterizan: enfrentar las dificultades económicas que provoca el impacto del cambio o manejar las presiones políticas que se derivan del diseño de una nueva estructura institucional.

En el caso de México las dos disyuntivas se presentaron juntas y ése es el escenario en el que se ha desarrollado mi gobierno.

A partir del 2 de julio de 2000, el reto ha sido que la democracia en México dejara de ser eminentemente electoral para convertirse en una práctica social de carácter integral, con todo lo que esto implica.

En su estructura política básica, la nación requería ante todo recuperar el sentido y la validez del Estado de derecho, del fortalecimiento de su sistema legal como cimiento de nuestra democracia. Era preciso que este sistema legal protegiera las libertades, los derechos civiles y estableciera redes de responsabilidad y rendición de cuentas. Era también indispensable garantizar que la ley protegiera a los ciudadanos de los actos arbitrarios de las autoridades.

Aunque no he estado solo en esta tarea de reconstitución, en estos más de cuatro años he aprendido que no basta con una gran voluntad para remontar el dicho de “más vale malo por conocido...”; que las prácticas políticas cambian muchas veces a mayor velocidad que los hábitos culturales, y que hacer valer la ley puede ser una empresa que se topa con el rechazo y la incomprensión.

Con todo, la discusión acerca de lo que es válido y lo que no lo es, en términos de lo que prescribe la ley, comienza a ser un tema muy importante en los debates públicos y esto es un primer gran paso.

La democracia debía terminar con el presidencialismo omnipresente que hacía de nuestro país un caso especial. Esto demandaba romper con los tres núcleos que lo caracterizaban: el poder desmedido del Ejecutivo, el centralismo y el dominio de un partido de Estado.

La autonomía y el equilibrio de los poderes de la Unión, el impulso a un federalismo independiente a la vez que solidario, y el surgimiento de un pluralismo vital son aportes visibles del cambio que hemos emprendido.

Los costos no han sido pocos, el retraso de las reformas más apremiantes para incorporar al país de lleno en la dinámica mundial, por ejemplo, se ha debido a decisiones del Congreso que respeto pero no comparto.

El mío, como todo gobierno sin mayoría en el Congreso, ha dependido del acuerdo entre los partidos para ejercer un buen gobierno y para emprender la reforma del Estado. Quisiera resaltar que, en nuestro caso, la negociación que es un proceso normal en las democracias, en el caso mexicano ha tenido un alto grado de dificultad. Esto se debe a que

la oposición a la que nos enfrentamos es la que detentó el poder durante 71 años y a la que el PAN desalojó de Los Pinos con un abrumador apoyo de la ciudadanía.

Debo admitir que la relación con el Legislativo no ha sido tersa ni ha permitido entablar las negociaciones necesarias para lograr el mayor beneficio de la toma de decisiones. Es preciso también decir que mi presencia en la Cámara de Diputados en ocasiones no ha recibido la cortesía que merece la investidura presidencial.

Como en todo proceso de transición, los ajustes institucionales, la definición de nuevos pesos y contrapesos, implican costos que, en mi opinión, han valido la pena asumir en una apuesta a largo plazo; en el tiempo que tome a cada uno de los poderes jugar el papel que les tiene asignado un régimen democrático.

En cuanto al proyecto político que la ciudadanía respaldó en las urnas hace cinco años, su propósito es ampliar el sentido de la democracia para que, además de significar el respeto a la decisión que los ciudadanos reflejan en su voto, abarcara otras dimensiones como la social y la económica.

Dar un sentido integral a la democracia ha demandado recuperar la confianza de la ciudadanía en la política a partir de una estrategia que se apuntala en tres ejes: libertad de expresión, transparencia y derecho a la información.

A diferencia del pasado, hoy en México cualquier persona es libre de expresar sus ideas. Esto ha traído consigo una suerte de “destape” en el que la crítica al

gobierno se ha convertido en una práctica cotidiana. Es entendible que, después de 70 años de censura, la opinión se situó en el extremo opuesto al del silencio obligado y estoy seguro de que la sensatez de la sociedad y el profesionalismo de los medios harán que esta libertad que hoy se expresa de manera explosiva llegue, en su momento, a un justo medio.

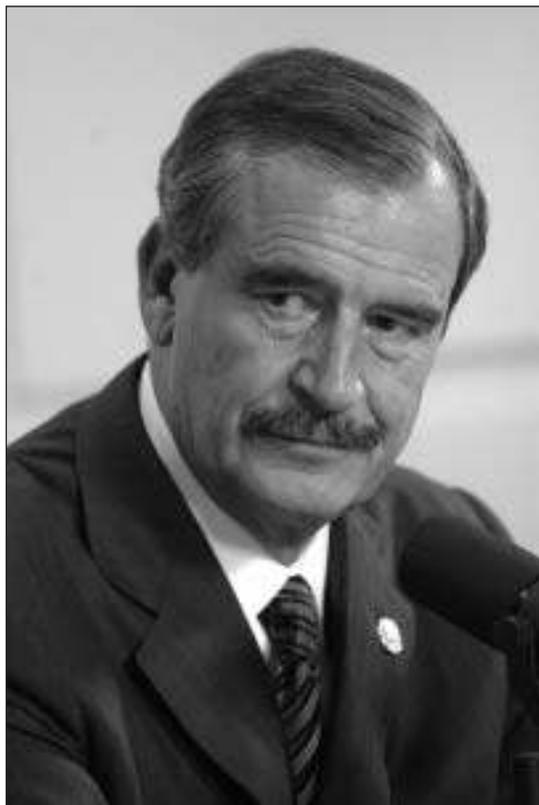
La transparencia y el derecho a la información son el antídoto que las sociedades democráticas han encontrado contra la corrupción. Entre los logros que más deben enorgullecernos está el haber institucionalizado ambas prácticas a través de una ley que las garantiza y de la constitución de un instituto autónomo vigilante de que los ciudadanos tengan acceso a la información pública generada por el gobierno.

Si en los gobiernos que me antecedieron la opacidad en la información era el telón de fondo para la corrupción ahora todo se muestra y los malos manejos públicos se denuncian y se castigan.

El proyecto que iniciamos hace más de tres años se concedía la misión de hacer de la democracia, además de un valor en sí mismo, un medio indispensable para el desarrollo humano.

Nuestra meta era que cada mexicano fuera libre, económica y socialmente, para decidir el destino que quería dar a su vida. Esto obligaba a definir la política económica en un doble sentido, como certeza macroeconómica y como vehículo para asegurar el bienestar material de las personas, en especial de quienes más necesitan el apoyo del Estado.

En lo que toca a la macroeconomía, los primeros tres años de mi gobierno fueron complicados. La



economía en el nivel mundial entró en un periodo recesivo que afectó a todos los países y México no tenía por qué ser la excepción.

De lo que sí puedo sentirme satisfecho es de haber elegido el camino responsable de la prudencia que ha conducido a la estabilidad de los indicadores fundamentales de la economía.

Lo que ahora parece natural es producto de muchos años de esfuerzo y disciplina: la inflación se ha reducido de 9% que teníamos en 2000 hasta un nivel inferior a 4% con el que esperamos terminar este año. Esto ha ayudado a que, a diferencia de lo sucedido en el pasado, los mexicanos no hayamos perdido poder de compra.

Las tasas de interés de referencia han disminuido hasta mantenerse en niveles de un dígito. En 2000 éstas estaban en 17% y hoy son de 9.6% (Cetes a 28 días). Esto es importante porque ha permitido que la sociedad recupere su acceso al crédito. Hay que recordar que hace sólo unos pocos años aspirar a un crédito para comprar una casa o un automóvil era prácticamente un sueño imposible.

El tipo de cambio peso-dólar se ha mantenido estable y no es ya un factor de incertidumbre para la inversión. Ha pasado de 9.6 a 11 pesos por dólar en lo que va de la presente administración. Y las reservas internacionales se han casi duplicado; han pasado de 33 mil a 60 mil millones de dólares.

La segunda acepción que hemos dado a la economía es la de ser un vehículo para asegurar el bienestar material de las personas más necesitadas. Dar ese objetivo a la economía demandaba poner en marcha políticas públicas muy específicas que garantizaran un piso básico de educación, salud y vivienda para un mayor número de mexicanos. Exigía también la construcción de infraestructura básica, el aumento de la productividad agrícola y la promoción de la mediana y pequeña empresas. En suma, lo que buscábamos era crear las bases de una democracia para el desarrollo.

Como gobernante y como mexicano me es difícil aceptar que todo este gran esfuerzo colectivo ha sido menospreciado por algunos, frente a las grandes expectativas que se desprendieron del arribo de la de-

mocracia y de la imposibilidad de cubrir la inmensidad de demandas que se presentan en una sociedad tan compleja como la mexicana. No obstante, estoy satisfecho con lo alcanzado en estos más de cuatro años de gobierno; siendo realistas, hemos hecho cuanto ha estado en nuestras manos para resolver los problemas más apremiantes del país.

Soy militante de Acción Nacional porque tengo una profunda empatía con su doctrina. El humanismo como base filosófica de una acción social que busca el bien común, la defensa de la dignidad de las personas y la práctica de la solidaridad han sido principios importantes del gobierno del cambio, en especial de la política social.

En consonancia con el propósito de dotar a la economía de un rostro humano, diseñamos una política social estructurada para cubrir cuatro de las más importantes carencias de los mexicanos:

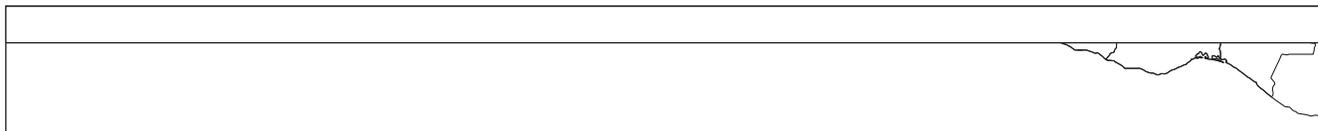
La primera es la de las capacidades físicas e intelectuales, donde nuestra preocupación es proporcionar a quien lo necesite la salud, la educación y la capacitación necesarias para participar plenamente en la sociedad.

La segunda son las oportunidades de ingresos para que las capacidades se traduzcan en mayores niveles de bienestar. Otro de los propósitos es fomentar el financiamiento y la asistencia técnica a los proyectos que surgen de las propias comunidades.

Lo anterior se complementa con la lucha en otros dos frentes: en el de la protección social, donde hemos trabajado para que un mayor número de personas cuenten con un centro de salud y una escuela cercana, así como todos los servicios indispensables: agua potable, drenaje y energía eléctrica.

La formación de un patrimonio es el cuarto problema que aborda nuestra política social. Apoyamos a las familias para que se hagan de su propia casa o terreno, que fomenten el ahorro que permita enfrentar cualquier urgencia o que pueda ser invertido para mejorar la economía familiar.

Una de las transformaciones más importantes que ha visto el país es el haber roto con patrones de negociación social cuyos beneficios se ubicaban en la acción extrainstitucional. Si bien el corporativis-



mo ya se había ido debilitando a lo largo de los años, la relación corporativista de dádivas gubernamentales a cambio de apoyo político seguía siendo una práctica vigente. El arribo de la democracia ha permitido cambiar esta lógica e ir transformando gradualmente una cultura de súbditos en otra de ciudadanos.

A partir de la idea de que lo mejor para el país es el fortalecimiento de las redes de capital social, hemos trabajado para que la operación de los programas sociales se fundamente en el valor del solidarismo y que su objetivo sea aumentar las oportunidades de las personas.

El fortalecimiento de una ciudadanía social implicó crear el marco propicio para la participación, no sólo con la creación de una ley que la fomenta y la considera fundamental en el diseño y aplicación de las políticas públicas, sino como una forma de asegurarnos que el bienestar que provee el Estado está en concordancia con las demandas y las necesidades de quien lo recibe.

Una de las enseñanzas que los padres fundadores de Acción Nacional nos han dejado a los militantes del partido es la de reconocer la importancia que tiene para la sociedad el respeto a la dignidad humana. Devolver a muchas y muchos mexicanos su dignidad como personas llevó a este gobierno a promover una ley para que nadie sea excluido de la vida social por su origen étnico, por su género, edad o religión, por sus opiniones, estado de salud o por tener capacidades diferentes. Este hecho es histórico porque constituye el inicio de nuevas formas de convivencia social en nuestro país: incluyentes, tolerantes y, con ello, más armónicas.

## Reflexiones finales

Ingresamos al quinto aniversario del triunfo de la democracia con graves problemas que aún no hemos podido resolver, algunos de ellos, como la pobreza extrema y la inseguridad, porque es imposible darles solución en un lapso de seis años; otros pendientes se deben a errores de diseño en la política pública y algunos más a la falta de acuerdos entre

todos los actores responsables de la toma de decisión. Tengo el dedo puesto en el renglón de cada uno de ellos y seguiré trabajando para cumplir mi compromiso de resolverlos.

El otro tema al que quisiera referirme es el del desencanto con la democracia. Éste ha sido un cambio político que ha significado momentos difíciles para todos: gobernantes y gobernados, en eso México no se distingue de otros países que han dado fin a las etapas autoritarias de su historia. No obstante, sociedad y gobierno hemos ido sentando las bases para consolidar una democracia en el sentido integral de la palabra, para que lo que se logró en las urnas el 2 de julio de 2000 vaya a más.

Hay aspiraciones que se logran a través de la democracia y hay otras que se deben sólo a nuestra responsabilidad y tenacidad individuales. Al gobierno le corresponde asegurarse de que las bases de articulación de la vida pública sean firmes y garanticen bienestar, justicia y equidad. A los ciudadanos les compete vigilar que así se haga y trabajar para que sus demandas se traduzcan en acciones eficientes de política.

Todo aprendizaje implica costos y los mexicanos estamos aprendiendo a vivir en democracia. Lo hacemos incorporando a nuestro vocabulario político y cotidiano palabras como pluralidad, apertura, participación, corresponsabilidad; adquirimos también conciencia de cuán importante es asumir valores como los de la libertad, legalidad y probidad.

Es apresurado, si no es que arbitrario, hablar de desencanto. La democracia no se agota en el gobierno de Vicente Fox y seguramente el camino hacia su consolidación estará lleno de éxitos, pero también de decepciones. Quisiera advertir que aunque la inmensa mayoría somos sus adeptos, la democracia tiene enemigos que intentan desprestigiarla.

El juicio sobre lo alcanzado por este gobierno le corresponde y lo va a hacer la ciudadanía, cuando se acaben los seis años que marca la Constitución para su ejercicio. Y tal vez después, cuando la historia coloque las acciones en su justa dimensión. Ése es el juicio que me importa como presidente y al que me someteré con todo valor.